



PRACTICAL
LEARNING
for
INTERNATIONAL
ACTION



ISAGEN y la construcción de la Central Hidroeléctrica Río Amoyá - La Esperanza

Tolima, Colombia

Visita mayo de 2016

Simón Patiño Montoya y Ben Miller
CDA Collaborative Learning Projects y
Fundación Ideas para la Paz



Fundación Ideas para la Paz (FIP)

La Fundación Ideas para la Paz es un centro de pensamiento independiente creado en 1999 por un grupo de empresarios colombianos. Su misión es generar conocimiento, proponer iniciativas, desarrollar prácticas y acompañar procesos para contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. También busca aportar a la comprensión de las conflictividades de nuestro país, ejerciendo el liderazgo necesario para movilizar a ciudadanos, servidores públicos y empresarios alrededor del objetivo común de construir una sociedad en paz. www.ideaspaz.org

CDA Collaborative Learning Projects (CDA)

CDA es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la mejora de la efectividad del trabajo internacional de asistencia humanitaria, construcción de paz, desarrollo sostenible, y operaciones responsables empresariales. www.cdacollaborative.org

Versiones electrónicas de este documento están disponibles en los sitios web de CDA y de FIP. Nos gustaría saber cómo se usan nuestros recursos. Su retroalimentación es un elemento de nuestros procesos de aprendizaje y evaluación. Envíe su retroalimentación a feedback@cdacollaborative.org o fip@ideaspaz.org

Acerca de los autores

Simón Patiño: Profesional en política y relaciones internacionales de la universidad Sergio Arboleda. Investigador de la Fundación Ideas para la Paz en el área Empresas y Construcción de paz desde 2015. Sus áreas de experticia son el análisis de riesgos en seguridad y derechos humanos, y prácticas corporativas responsables. Contacto: spatino@ideaspaz.org

Ben Miller: licenciado en antropología social de la universidad de Harvard y con maestría de la universidad de Chicago en la misma área de estudios. Es miembro de CDA desde 2011. Sus áreas de experticia son el análisis de riesgos corporativos, negocios sensibles al conflicto y prácticas corporativas responsables. Contacto: bmiller@cdacollaborative.org

Citación sugerida

Patiño, Simón y Ben Miller. *ISAGEN y la Construcción de la Central Hidroeléctrica Río Amoyá – La Esperanza*. Cambridge, MA: CDA y FIP, 2016.

Reconocimientos

Este informe fue posible gracias al apoyo del Departamento Federal de Asuntos Exteriores del Gobierno de la Confederación Suiza. CDA y FIP también agradecen a ISAGEN su colaboración.

Foto de portada: Fotografía tomada del libro: ISAGEN. *Convivencia a Filo de Agua – Relatos de Esperanza*. Medellín, 2015. 101 p.

© 2016 CDA Collaborative Learning Projects y Fundación Ideas para la Paz. Este documento está bajo la licencia de Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>



Presentación

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y Collaborative Learning Projects (CDA) presentan este estudio de caso, el cual se enmarca en un proyecto colaborativo y de aprendizaje con empresas que han adelantado iniciativas corporativas en entornos con presencia de grupos armados no estatales (En inglés: Armed Non-State Actors, ANSA). El proyecto cuenta con el apoyo y financiación del Departamento Federal de Asuntos Extranjeros del Gobierno de la Confederación Suiza.

Este caso corresponde a un proyecto de generación eléctrica a través de la construcción de una hidroeléctrica a filo de agua en el corregimiento San José de las Hermosas, en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima (Colombia). El proyecto fue adelantado por la empresa colombiana ISAGEN. El periodo en que se construyó la hidroeléctrica, desde que se adquirió el proyecto sobre planos en 2006 hasta que se inauguró en 2013, fue crítico en materia de seguridad en el territorio de San José de las Hermosas pues la Fuerza Pública colombiana buscó recuperar el control territorial que era ejercido por el Frente 21 de las FARC.

Este hace parte de un grupo de tres estudios de caso que fueron comparados en un cuarto documento. El análisis conjunto de casos se inserta en un proyecto de aprendizaje más amplio sobre la responsabilidad empresarial y la identificación de prácticas efectivas para disminuir la violencia y los riesgos de la violencia, además de ampliar la seguridad humana en entornos con presencia de grupos armados no estatales.

La diferencia de este estudio adelantado por la FIP y CDA con otros estudios de caso en la materia, es que se analizan casos exitosos desde la óptica de los grupos de interés (autoridades, comunidades, líderes, organizaciones de la sociedad civil) y desde la óptica corporativa, en donde se estudian e identifican las decisiones y acciones corporativas para la concreción de los proyectos. Vale la pena mencionar que dichas decisiones corporativas no contribuyeron con la exacerbación de los conflictos locales ni fueron un factor para el deterioro del territorio en sus dimensiones sociales, económicas, ambientales y políticas. Por el contrario, contribuyeron al fortalecimiento de las comunidades y al desarrollo del entorno.

Tabla de contenido

Introducción	01
Metodología	03
El caso de la Central Hidroeléctrica Río Amoyá - La Esperanza	05
1. Contexto	05
1.1 Localización del proyecto	05
1.2 Contexto nacional de violencia armada	08
1.3 Origen de las FARC en el departamento del Tolima	10
1.4 Estrategias de seguridad nacionales	11
2. Contexto regional de violencia armada	13
2.1 Análisis del conflicto en el ámbito comunitario	14
2.2 Surgimiento de liderazgos en medio del conflicto	15
3. Antecedentes del proyecto	16
3.1 Valoración y exposición al riesgo	18
3.2 Primeros acercamientos de ISAGEN	19
4. Retos y desafíos	21
4.1 Seguridad y conflicto armado	21
4.2 Plan de beneficios a la comunidad	22
4.3 La Mesa de Transparencia y el Observatorio de Derechos Humanos	23
4.4 Gestión social y relacionamiento	25
4.5 Construcción	26
5. Situación actual	27
Social y ambiental	27
Organización comunitaria	27
Seguridad y convivencia	27

Introducción

Este estudio de caso corresponde a la construcción de una hidroeléctrica en el corregimiento San José de Las Hermosas en el municipio de Chaparral (sur del departamento del Tolima) entre 2006 y 2013, en un territorio caracterizado por la presencia histórica del Frente 21 de la guerrilla de las FARC.

Los habitantes del sur del departamento del Tolima desde los años 50 del siglo XX han presenciado el surgimiento de diferentes expresiones de la violencia, primero desde el surgimiento del periodo histórico denominado La Violencia Partidista, luego con el fortalecimiento de la guerrilla de las FARC y otros fenómenos ligados a la presencia de grupos armados ilegales contrainsurgentes, y, además, con las problemáticas generadas por la siembra de cultivos ilícitos como la amapola como forma de financiación de los grupos ilegales.

ISAGEN tomó en 2006 la iniciativa de ejecutar un proyecto hidroeléctrico a filo de agua, es decir, aprovechando el caudal de los ríos Amoyá y Davis, sin necesidad de generar un embalse. Sin embargo, las potencialidades de la geografía para construir este tipo de infraestructura coincidía con zonas de presencia histórica de las FARC, pues allí se encontraba uno de los frentes más antiguos de esta guerrilla, liderado para ese entonces por Alfonso Cano, máximo comandante de las FARC.

A pesar de las problemáticas de seguridad, la empresa ISAGEN decidió asumir el reto de construir la hidroeléctrica. Para lograrlo fueron clave los acercamientos y la participación de las comunidades representadas por las juntas de acción comunal (JAC) del Cañón de Las Hermosas,

integradas en la Asociación de Las Hermosas con desarrollo al futuro - Asohermosas.

Con Asohermosas se realizó un largo proceso de diálogo y concertación, que se adelantó en medio de la presencia de las FARC y el intento de retoma del territorio por parte de la Fuerza Pública. Como fruto de las negociaciones entre comunidad y empresa se concertaron los acuerdos sobre las obras a ejecutar, las medidas de manejo ambiental, la participación social, los beneficios para las comunidades y el desarrollo de la región, así como los mecanismos de intervención en la zona para la ejecución de los trabajos, en medio del conflicto, con garantías para los habitantes frente al respeto de los Derechos Humanos, DDHH. Desde el principio hubo claridad entre las partes que la ejecución del proyecto requería la presencia del Ejército Nacional. Como resultado de la concertación se expidió el documento "Concertación de beneficios con la comunidad del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico del Río Amoyá", que la comunidad asumió como marco de referencia para la ejecución de las obras. Lo denominaron "el testamento".

A pesar de los acuerdos en materia de beneficios derivados del proyecto, continuó la confrontación entre el Ejército y las FARC con afectaciones a la convivencia y seguridad de los habitantes del corregimiento, quienes habían aprendido a convivir con el grupo armado en relativa calma, durante décadas. Las FARC, además, se encargaban del orden social y les brindaban seguridad. Estas afectaciones y algunas denuncias sobre violaciones en DDHH se pudieron tratar en un espacio de diálogo abierto y participativo que se denominó la "Mesa de Transparencia", presidida por el Gobernador del departamento del Tolima.

La conformación y funcionamiento de la Mesa de Transparencia fue facilitada por ISAGEN y, además de la Gobernación, en la misma tenían asiento delegados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la Consejería para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, de la Defensoría del Pueblo, de las Fuerzas Militares y de la Policía del Tolima, de la Fiscalía, la Alcaldía y la Personería Municipal de Chaparral, y de las comunidades de Las Hermosas. En la Mesa, las comunidades exponían sus quejas y la Fuerza Pública respondía. La Mesa de Transparencia facilitó el diálogo entre actores anteriormente antagónicos, pues a las comunidades se les veía como colaboradoras de la guerrilla y el Ejército era percibido por las comunidades como intruso y violento. La Mesa de Transparencia facilitó el diálogo y la continuidad de las obras en los momentos más críticos del proyecto.

La Central Hidroeléctrica Amoyá – La Esperanza se inauguró en julio de 2013, no exenta de problemas de seguridad, ataques a las caravanas de trabajadores, interrupción de los procesos de diálogo, entre otros aspectos críticos, pero también de un proceso ejemplar en materia de fortalecimiento y ampliación del liderazgo, especialmente con la organización Asohermosas, como interlocutor válido ante las comunidades.

Todos los problemas, desafíos y soluciones del proyecto se abordan de forma detallada en tres secciones del estudio de caso: (i) contexto de violencia en los planos nacional, regional y local (ii) antecedentes, retos y construcción del proyecto y (iii) situación de la región después del proyecto.

Metodología

Para la elaboración del presente estudio de caso se recolectó y analizó información de dos tipos: operacional y externa. La operacional implicó analizar documentos corporativos de ISAGEN y otros disponibles, entre ellos estudios ambientales y técnicos relacionados con la construcción de la hidroeléctrica. También se recabó información por medio de entrevistas semi-estructuradas a personal de ISAGEN, especialmente a directivos. La finalidad de este enfoque era entender el proyecto desde el punto de vista operativo, comprendiendo los desafíos, dilemas y decisiones que enfrentó la empresa para el cumplimiento de los objetivos empresariales.

Para la información externa se tuvieron en cuenta fuentes primarias y secundarias como: prensa, estudios académicos, caracterizaciones de los territorios y fuentes oficiales. También se realizaron entrevistas semi-estructuradas a comunidades, autoridades locales y a aquellos líderes que estuvieron comprometidos directamente durante la etapa de planeación y construcción de la central hidroeléctrica.

Las entrevistas dirigidas a personal operativo se realizaron en abril de 2016 en la ciudad de Medellín y las entrevistas externas se adelantaron en el municipio de Chaparral en mayo de 2016.

El estudio está escrito en forma de narrativa y aborda tanto los desafíos operacionales como las acciones de los actores externos al proyecto. El objetivo del proceso narrativo es que las empresas conozcan los detalles y el curso de la historia del proyecto, y que tengan una visión bidireccional (empresa y actores externos) frente a la concreción de la hidroeléctrica.

La Fundación Ideas para la Paz y CDA agradecen a ISAGEN por su interés en la realización de este estudio de caso y por haber colaborado en el proceso logístico y documental. También agradece a los líderes comunitarios entrevistados en el municipio de Chaparral por haber brindado su tiempo para las entrevistas y consultas y por haber suministrado la información necesaria para construir el estudio.



Listado de acrónimos

Asohermosas: Asociación de Las Hermosas con desarrollo al futuro

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia

CCC: Comando Conjunto Central de las FARC

CDA: Collaborative Learning Projects

CNMH: Centro Nacional de Memoria Histórica

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular

FIP: Fundación Ideas para la Paz

ELN: Ejército de Liberación Nacional

EPL: Ejército Popular de Liberación

PC3: Partido Comunista Clandestino

PMA: Plan de Manejo Ambiental

PFGB: Programa Familias Guardabosques

JAC: Juntas de Acción Comunal

El caso de la Central Hidroeléctrica Río Amoyá - La Esperanza

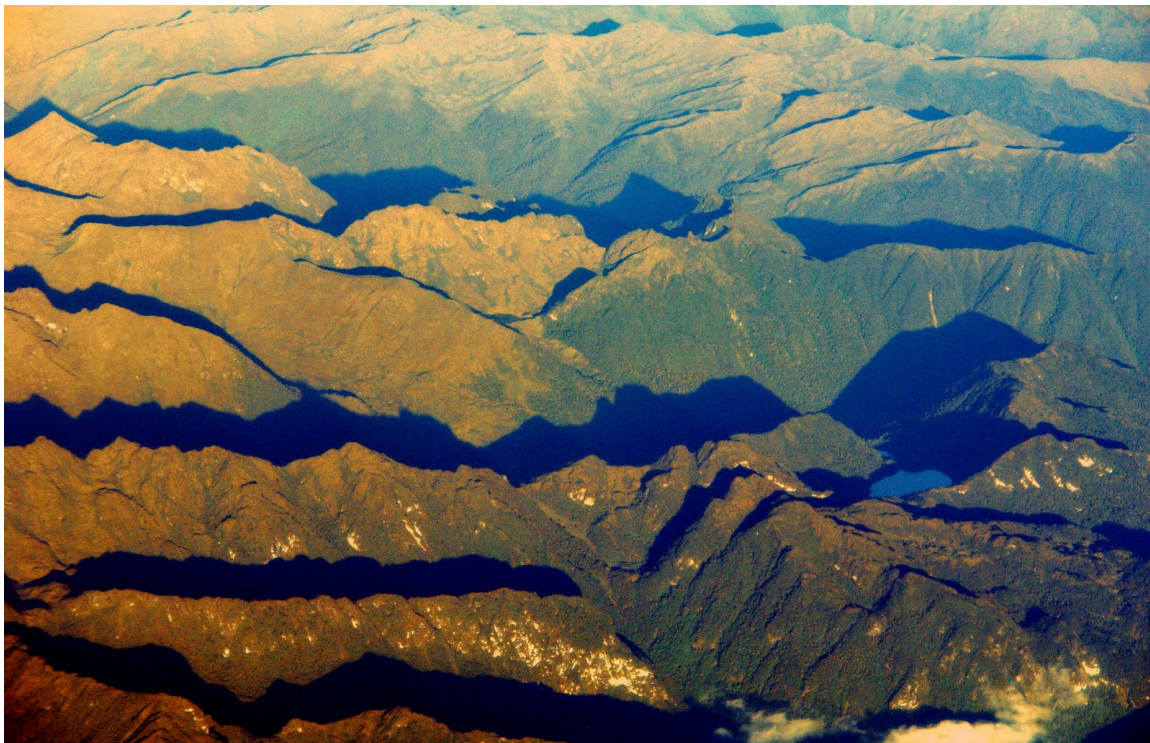


Imagen 1. Vista aérea del Cañón de las Hermosas. Imagen tomada del sitio web de Organización Colparques. [En línea] [Consultado el 7 de octubre de 2016]. Disponible en: <http://www.colparques.net/HERMOSAS>

1. Contexto

1.1 Localización del proyecto

En 2013 entró en operación la Central Hidroeléctrica Río Amoyá – La Esperanza, construida por la empresa colombiana ISAGEN en el corregimiento de Las Hermosas, municipio de Chaparral, al sur del departamento del Tolima (Colombia). La hidroeléctrica cuenta con capacidad de generación de 80 MW (megavatios) aprovechando el caudal de los ríos Amoyá y Davis a través de un sistema de captación a filo de agua.

El municipio de Chaparral está a 163 kilómetros de distancia de Ibagué, la capital del Tolima. El corregimiento Las Hermosas se

encuentra ubicado en el cañón de Las Hermosas, en las estribaciones del Parque Nacional Natural Las Hermosas, en la Cordillera Central, entre los departamentos del Valle del Cauca y Tolima. La geografía del parque, de 125.000 hectáreas, se caracteriza por la presencia de afilados riscos, más de 300 lagunas, extensos páramos y selvas andinas, lo que hace difícil su acceso y penetración. En el Parque nace, entre otros, el río Amoyá.

La principal vocación económica de Chaparral es la agricultura, en donde se destaca la siembra de café y frutales. Como renglones secundarios se encuentran las actividades ganaderas y pecuarias, las cuales se desarrollan especialmente en las zonas rurales. En el casco urbano se desarrollan

actividades comerciales y de servicios, hay presencia de servicios bancarios, transporte terrestre y venta de víveres y alimentos.

Chaparral se encuentra dividido en 5 corregimientos, que contienen un total de 151 veredas. El número aproximado de habitantes del municipio, de acuerdo con proyecciones oficiales, es de 47.248 habitantes para el año 2016, de los cuales 26.176 están en el área urbana y 20.532, en el área rural.¹

El corregimiento de Las Hermosas tiene un total de 28 veredas, en una extensión de más de 46.000 hectáreas. Respecto a su población, de acuerdo con un censo elaborado por la propia comunidad en el año 2014, se contabilizaron 5.111 personas, de las cuales 2.312 son mujeres y 2.799 hombres.

El proceso de poblamiento de Las Hermosas empezó en la década de los 30 del siglo XX, con mayor crecimiento entre 1960 y 1970, por causa de la expansión de la economía cafetera a nivel nacional. Para los pobladores del corregimiento, las décadas de los 60 y 70 significaron una época de prosperidad, especialmente por los buenos precios del café a nivel internacional. En ese periodo, además, se crearon las primeras organizaciones comunitarias, entre ellas el Comité de Cafeteros y las Juntas de Acción Comunal (JAC).

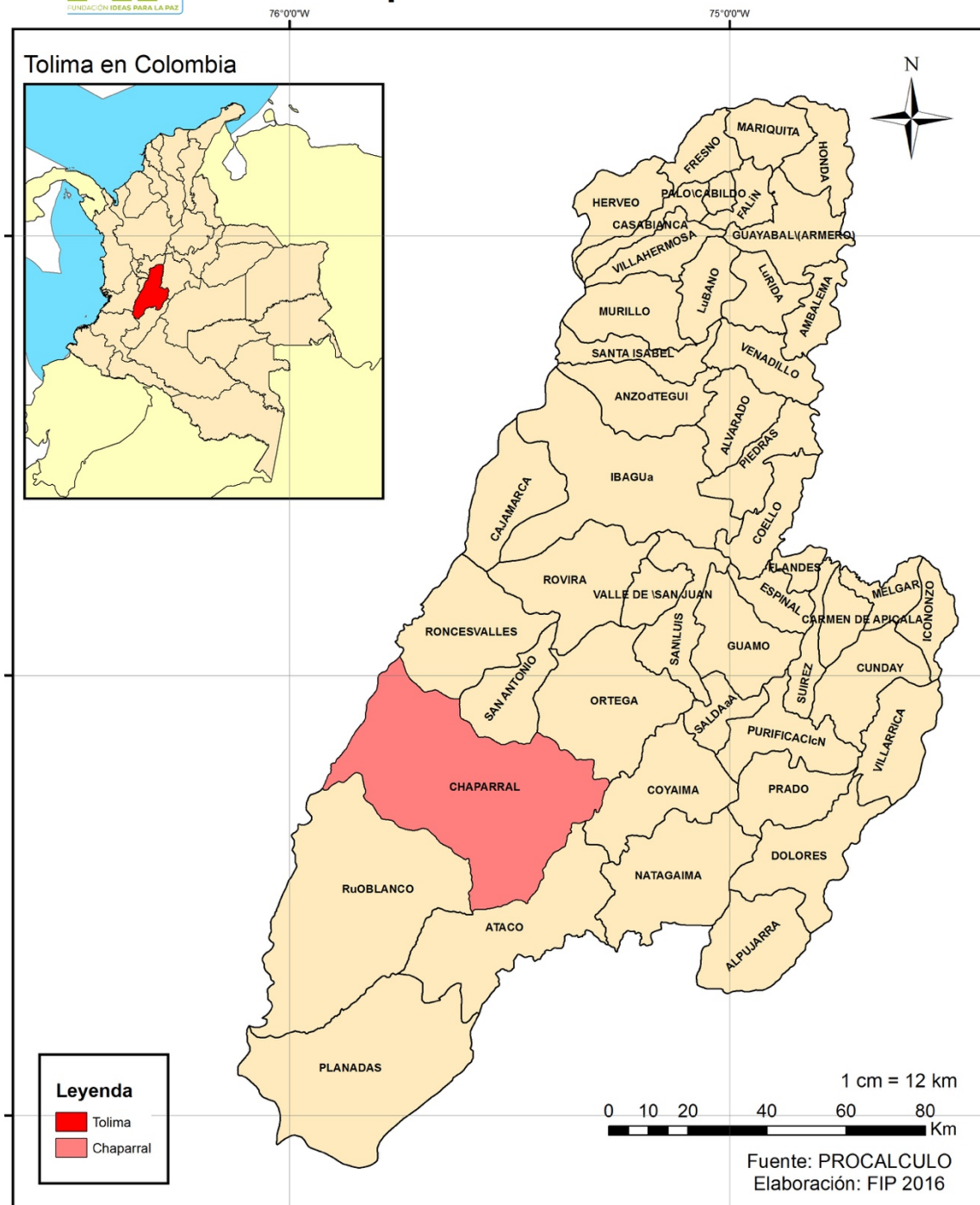
Dichas organizaciones fueron las primeras en promover la construcción de obras civiles

comunitarias como puentes y caminos, ante las pocas iniciativas públicas.²

¹ Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – 2015.

² Cfr. ASOHERMOSAS y Universidad Javeriana. Plan de Desarrollo Sustentable del Corregimiento de las Hermosas 2012 – 2030, Chaparral, Tolima. Bogotá, 2014. 37 p.

Chaparral en Colombia



Mapa 1. Ubicación de Chaparral en Colombia. Elaboración FIP.

El proceso de poblamiento del corregimiento de Las Hermosas no tuvo presencia estatal de instituciones del orden nacional o regional, ni contó con inversión en obras locales. Las obras adelantadas por iniciativa comunitaria durante los procesos de poblamiento no eran suficientes para suplir necesidades básicas como acceso al agua potable, educación, salud y vías de acceso.

Para la fecha en que empezó la construcción de la Central Hidroeléctrica Amoyá existía en la población la percepción de descuido generalizado y desatención de parte del Gobierno local y nacional. Según el Plan de Desarrollo del corregimiento (2014) la presencia institucional se reducía a la permanencia de algunos docentes en las escuelas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar³, Parques Nacionales Naturales y eventuales brigadas de salud.⁴

Entre los indicadores sociales críticos que se destacan de la línea base del corregimiento, elaborada en 2012, se encuentran que solamente el 39% contaba con el servicio de acueducto, sólo 5,7% tenía acceso a servicios de alcantarillado y 20% de los hogares no contaba con servicio de energía eléctrica. La mayor parte de la infraestructura de las viviendas se encontraba en alto estado de deterioro, varias de ellas localizadas al borde de las vías y en zonas de alto riesgo de deslizamiento.⁵

El renglón económico que más se destaca en el corregimiento es la siembra de café,

aunque con bajas tasas de productividad y tecnificación. La mayor parte de la población se ocupa en el cultivo de café. En algunas veredas de la zona alta del corregimiento se desarrollan actividades de producción de pastos y cría de ganado lechero.

1.2 Contexto nacional de violencia armada

Antes de abordar las dinámicas de violencia y presencia de grupos armados ilegales en la región, es importante explicar el contexto nacional en el cual se desarrollan para comprender cómo se fue gestando el proyecto hidroeléctrico de ISAGEN, en el municipio de Chaparral.

En Colombia, desde los años sesenta del siglo XX se ha venido desarrollando un conflicto armado de baja intensidad, entre grupos armados ilegales y las Fuerzas Armadas del Estado colombiano. Entre los ilegales se encuentran las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) y, en otro bando, los grupos paramilitares o autodefensas, que surgieron en los años 80 como forma de contención de la insurgencia. A estos grupos se añaden los carteles del narcotráfico y la delincuencia organizada, esta última asociada al tráfico de drogas y otros delitos como el secuestro.

Las causas del conflicto divergen en su análisis en términos de orígenes y continuidades y respecto a los distintos periodos de la historia del país. Sin embargo, su expresión contemporánea puede explicarse en gran medida por el desafío de las guerrillas al Estado colombiano en los años sesenta, al que se suman hechos

³ Institución colombiana del orden nacional, encargada de la protección de la infancia y la adolescencia.

⁴ Cfr. Ibíd.

⁵ Cfr. Ibíd. 41 – 42 pp.

internacionales como la Revolución cubana y el auge de la Unión Soviética a mediados del siglo XX. No obstante, los altos recursos que generaba y sigue generando el narcotráfico, sumado a un Estado históricamente débil para ejercer el monopolio de la fuerza, son algunos de los factores que han prolongado el conflicto hasta la actualidad.

Los orígenes del conflicto se pueden remontar a la época de la Violencia Partidista, periodo en la historia nacional que se ubica entre 1948 y 1958. Este capítulo de la historia colombiana fue un conflicto entre simpatizantes del Partido Conservador y del Partido Liberal, en una confrontación que, sin ser declarada como guerra civil, dejó un número aproximado de 300.000 muertos. Aunque el inicio de este periodo se ubica en 1948, tras el asesinato del líder político liberal Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá (mientras se llevaba a cabo la IX Conferencia Panamericana, la cual dio vida a la Organización de Estados Americanos - OEA), expresiones de violencia partidista se venían registrando casi desde el año 1930.

Una vez ocurrido el asesinato de Gaitán, brotes de violencia se registraron en diferentes zonas del país. Liberales enfurecidos por la muerte de su líder la emprendieron contra familias y líderes conservadores. Por otra parte, sectores conservadores en 1948 decidieron reclutar y armar campesinos y adeptos en el departamento de Boyacá, con la intención de preservar el Gobierno del presidente conservador Mariano Ospina Pérez. A los grupos de filiación conservadora se les conoció como los “chulavitas” y fueron trasladados a las zonas de conflicto para sofocar los brotes de sublevación. Tal situación intensificó la violencia en extensas

zonas del país, como los Llanos Orientales (oriente de Colombia) y la zona central, en donde se encuentra el departamento del Tolima.

En el Tolima los “chulavitas” se enfrentaron contra los denominados “gaitanistas”, situación que se tradujo en varias masacres en los municipios de Anzoátegui, Falan, Chaparral y Rovira. En estos municipios se organizaron grupos de autodefensas liberales que huyeron hacia zonas rurales aisladas para salvaguardar sus vidas. Dichos grupos serían el embrión de las futuras guerrillas liberales del sur del Tolima.⁶

Hacia principios de la década de 1950 el país se encontraba en una situación de amplia inestabilidad política interna y de inseguridad. Varios sectores políticos vieron en un Gobierno militar una salida para la violencia rural y la división partidista. En este contexto se observaba al Ejército Nacional como actor neutral, contrario a la amplia adherencia que tenía la Policía Nacional con las ideas del partido Conservador. En 1953 el militar Gustavo Rojas Pinilla asumió la presidencia mediante un golpe militar (1953 – 1957). Entre sus primeras medidas estuvo la despolitización de la Policía y una amnistía que decretó para buscar el desarme de los movimientos de autodefensa liberales. En el sur del Tolima algunos grupos se acogieron. Sin embargo, otros de filiación comunista se abstuvieron para luego conformar los

⁶ Cfr. URIBE, María. Violencia y Masacres en el Tolima: desde la muerte de Gaitán al Frente Nacional. En: Banco de la República. [En línea] (1991). [Consultado el 18 de octubre de 2016]. Disponible en: <http://www.banrepcultural.org/node/32650>

primeros focos guerrilleros de las FARC en el país.

Aunque el Gobierno de Rojas Pinilla intentó la “pacificación” del Tolima, así como el presidente civil que le sucedió, Alberto Lleras Camargo (durante un periodo de alternancia política denominado el Frente Nacional⁷), el territorio del Tolima se vio enfrascado en altos niveles de violencia. En el año 1958, por ejemplo, se registraron 52 masacres por violencia partidista, situación que obligó a la formulación de medidas como el cambio de autoridades civiles del departamento por mandos militares y la autorización del porte de armas por parte de la población para su defensa, pues ya no sólo se registraba violencia de tipo partidista, sino también había presencia de cuadrillas de bandoleros por todo el sur del departamento.

1.3 Origen de las FARC en el departamento del Tolima

En el Gobierno de Guillermo León Valencia (1966 – 1967), elegido como segundo presidente durante el Frente Nacional, se inició la denominada “pacificación” de la república, que consistió en el ataque a los grupos de bandoleros y la intervención aérea y militar por parte del Ejército Nacional a las denominadas “repúblicas independientes” - zonas donde se habían conformado focos guerrilleros con apoyo del Partido Comunista colombiano y en las cuales las guerrillas ejercían fuerte dominio territorial. En el Tolima ya se diferenciaban claramente

aquellos sectores violentos dedicados al bandolerismo, sin ninguna legitimidad y apoyo por parte de la población, y los focos guerrilleros comunistas, a los que en adelante se les atacó como política de Estado.

En el sur del Tolima se encontraba la denominada “república independiente de Marquetalia”, en el corregimiento Gaitania, del municipio de Planadas, muy cerca de Chaparral, punto que se suele considerar la “cuna” de las FARC. Es una zona montañosa donde habían ido a refugiarse los guerrilleros que no se entregaron durante la amnistía de Gustavo Rojas Pinilla, entre ellos los comandantes de las FARC Pedro Antonio Marín, alias “Manuel Marulanda Vélez” o “Tirofijo” y Luis Alberto Morantes, alias “Jacobo Arenas”.

En el año 1962 el Ejército y las guerrillas liberales iniciaron fuertes confrontaciones en la zona, situación que obligó al repliegue temporal de los guerrilleros hacia la Cordillera Central. En julio de 1964 estos guerrilleros constituyeron el Bloque Sur, el cual se expande hacia la Cordillera Oriental y hacia la región de la Orinoquia. Para 1966 las guerrillas liberales empiezan a autodenominarse como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC.

Después de la ofensiva oficial contra la “república independiente de Marquetalia” no existió una estrategia efectiva de consolidación del Estado en el sur del Tolima. A ello se sumó la difícil geografía, que permitió a las FARC aprovechar el territorio como refugio y zona de retaguardia. Este punto también representó un entorno estratégico para la guerrilla, pues es cercano a la capital colombiana y es un corredor de movilidad para la insurgencia que conecta el norte y el sur y el oriente con el occidente del

⁷ Este periodo va de 1958 1974, en gobierno de alternancia y coalición política en sucesión de cuatro periodos entre liberales y conservadores: Alberto Lleras Camargo (liberal), Guillermo León Valencia (conservador), Carlos Lleras Restrepo (Liberal) y Misael Pastrana Borrero (Conservador).

país lo que permite a la guerrilla condiciones favorables de movilidad, expansión y abastecimiento⁸.

Desde entonces el sur del Tolima ha sido parte fundamental de la zona de influencia del Comando Conjunto Central de las FARC (CCC) o Bloque Central de las FARC, que al igual que el Bloque Oriental, se encuentra conformado por los más importantes dirigentes de esta guerrilla. Del CCC forman parte el Frente 21, con amplia influencia en el sur del Tolima, junto con 3 columnas móviles y el Frente 66⁹.

1.4 Estrategias de seguridad nacionales

La construcción de la Central Hidroeléctrica Amoyá tiene su desarrollo durante el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2006 – 2010) y durante el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos (2010 – 2014). Aunque el conflicto en el Tolima tiene su génesis en la época de La Violencia a mediados del siglo XX, es durante el periodo comprendido entre 1996 y 2006, y luego con la ofensiva militar de Álvaro Uribe para eliminar las guerrillas en el sur del Tolima, que se agudiza el conflicto en esa zona del país.

El Centro de Memoria Histórica de Colombia (CNMH) ubica la década que va de 1996 a 2006 como el periodo en el que se recrudece el conflicto armado en buena parte del país, con especial repercusión sobre la población

civil y la infraestructura nacional¹⁰. El accionar de los grupos armados durante este periodo se concentró en la disputa frontal con otros grupos ilegales y con la Fuerza Pública por el control del territorio y actividades económicas ilegales, como la siembra de cultivos ilícitos, el tráfico de drogas, el secuestro extorsivo, el contrabando y el hurto de combustibles. Durante este periodo se registran los mayores índices de violencia y hechos relacionados con el conflicto¹¹. En 1991 en Colombia se alcanzó la cifra récord de 81,12 homicidios por cada 100.000 habitantes y, en el año 2000 se reportaron 3.478 secuestros, la cifra más alta en la historia en Colombia para este delito.

Hacia la década de 1990, la actividad guerrillera tuvo su más fuerte incremento luego de la realización de la Quinta Cumbre de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, espacio creado en 1987 con el objetivo de coordinar el accionar de varios grupos guerrilleros alrededor del país. En este grupo se encontraban las FARC, el ELN y el EPL, entre otros. En la Quinta Cumbre se decidió adelantar una mayor ofensiva contra la Fuerza Pública y un incremento de las acciones contra la infraestructura estratégica. La ofensiva hacia la infraestructura tuvo diversos propósitos, uno de ellos era generar presiones para el pago de extorsiones a empresas contratistas y operadoras de petróleo y generación eléctrica. Otro, era demostrar la capacidad bélica de los subversivos ante el Gobierno Nacional y la opinión pública. Como ejemplos de dicha estrategia se destaca la voladura sistemática del Oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento de Arauca (norte del país) y la

⁸ Fundación Ideas para la Paz. Dinámicas del Conflicto armado en Tolima y su impacto humanitario. [En línea] (2013). 8 p. [Consultado el 4 de octubre de 2016]. Disponible en:

http://archive.ideaspaz.org/images/DocumentoMonitoreo_ConflictoArmado_Tolima_Julio2013.pdf

⁹ Ibíd.

¹⁰ Cfr. Ibíd. 111 p.

¹¹ Ibíd. 156 p.

voladura de torres de transmisión eléctrica del sistema de transmisión nacional por todo el territorio.

Para contrarrestar la acción de las guerrillas, el presidente Cesar Gaviria Trujillo (1990 – 1994) conformó la Estrategia Nacional Contra la Violencia, mediante una mayor ofensiva contra las guerrillas y el fortalecimiento militar, además de la política de sometimiento a la justicia dirigida a los jefes de los carteles del narcotráfico. Durante este periodo, la Fuerza Pública concentró sus acciones en neutralizar a los comandantes del Estado Mayor de las FARC y la comandancia del ELN. Sin embargo, no se logró neutralizar algún cabecilla importante y las guerrillas se empezaron a fortalecer rápidamente con los recursos provenientes del narcotráfico.

Luego, con el mandato del presidente Ernesto Samper Pizano (1994 – 1998) la Fuerza Pública sufrió unos de sus más importantes reveses y el país vivió una fuerte escalada de la violencia. Se destacan las tomas de varias bases militares en el sur del país por parte de las FARC, como la de Las Delicias y la de Miraflores, que doblegaron la moral de las Fuerzas Armadas e hicieron sentir a la opinión pública que el gobierno de los Estados Unidos podía intervenir militarmente en Colombia. El liderazgo militar y político de Samper fue seriamente cuestionado, pues se le acusó de recibir dineros del narcotráfico para financiar su campaña presidencial.

Para aquella época los grupos paramilitares se empezaron a fortalecer y a expandirse en amplias zonas del territorio colombiano, bajo una estrategia contrainsurgente que se afianzó tras la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997. En algunos territorios como los Montes de María en Sucre y Bolívar (Norte de

Colombia) y en el departamento de Antioquia, las AUC lograron importante dominio territorial y coacción de la población.

Finalizando el gobierno Samper el balance en materia de seguridad fue negativo, lo que posibilitó el surgimiento de un discurso por la salida negociada del conflicto armado, propuesta por la cual resultó elegido presidente Andrés Pastrana Arango (1998 – 2002). Una vez asumió su mandato, empezó a adelantar conversaciones de paz con las FARC en una amplia zona del sur oriente del país, en donde las Fuerzas Militares despejaron el territorio de cuatro municipios para facilitar los diálogos. Sin embargo, dicho despeje fue aprovechado por las FARC para aumentar su capacidad militar y económica. Finalmente, en febrero de 2002 y a raíz del secuestro del senador Jorge Eduardo Gechen, el Gobierno rompió los diálogos de paz, después de infructuosos cuatro años de negociación.

A pesar del fracaso de los diálogos y del fortalecimiento de las guerrillas, el gobierno de Andrés Pastrana adelantó un importante proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, con la mejora en la capacidad operativa y la compra de mejor armamento y aviones militares. La mayor parte del proceso de fortalecimiento militar fue provisto a través de recursos del Plan Colombia.¹²

¹² El Plan Colombia fue un plan de cooperación de lucha contra las drogas y fortalecimiento del Gobierno colombiano, aprobado en 1999 por el Congreso norteamericano. A través de este, el gobierno colombiano recibió un aproximado de US\$2.800 millones de dólares (2000 – 2015). Posteriormente la administración Bush solicitó al Congreso de los EEUU una adición de US\$463 millones de dólares.

El fracaso de los diálogos de paz con las FARC y los intentos de diálogo con el ELN durante la presidencia de Andrés Pastrana permitieron el ascenso a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (periodo 2002 – 2010), quien resultó elegido con la promesa de recuperar la seguridad nacional mediante la vía militar. Su estrategia se denominó “política de Seguridad Democrática”, la cual permitió un rápido aumento de la Fuerza Pública en la mayor parte del país y un aumento considerable de las operaciones militares.

La ofensiva militar durante su gobierno invirtió la relación entre el número de acciones de las guerrillas y los combates por iniciativa de la Fuerza Pública. Desde finales de 2002, los combates de las Fuerzas Armadas superaron las acciones de las guerrillas¹³. En el gobierno Uribe también se dieron de baja a varios jefes del secretariado de las FARC, entre ellos alias el “Mono Jojoy” y alias “Raúl Reyes”. Esta estrategia fue favorable para el Estado colombiano y la población civil, y redujo casi a la mitad la capacidad bélica de las FARC y el ELN¹⁴. La ofensiva estatal obligó a las guerrillas a volver a la guerra tradicional de guerrillas, utilizando la estrategia de movilización con pequeños grupos. Además significó para la insurgencia una considerable pérdida de control territorial.

¹³ Ver cifras en Fundación Ideas para la Paz. Situación actual de las FARC. Bogotá, 2011. 7 – 10 pp. [En línea] [Consultado el 20 de julio de 2016]. Disponible en:

<http://www.ideaspaz.org/publications/posts/78>

¹⁴ A principios del año 2002, entre las FARC y el ELN sumaban una fuerza aproximada de 24.000 combatientes. Para 2015 las FARC contaban con unos 8.000 combatientes y el ELN, con menos de 1.000.

A la par de la ofensiva militar contra las guerrillas, durante el gobierno de Uribe las AUC iniciaron un proceso de desmovilización y sometimiento a la justicia (2003 – 2006), en el cual se desmovilizaron, aproximadamente, 31.600 miembros de los grupos paramilitares, entre ellos el Bloque Cacique Nutibara, el Bloque Centauros y el Bloque Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

Algunos paramilitares desmovilizados conformaron bandas delincuenciales y criminales en las regiones donde se desmovilizaron las estructuras paramilitares, creando un nuevo foco de violencia, especialmente a nivel urbano, con el uso de estrategias como la micro-extorsión y el micro-tráfico, problemas que hoy enfrentan las autoridades en varios municipios del país.

2. Contexto regional de violencia armada

El conflicto armado nacional ha tenido amplias diferencias a nivel regional, debido a condiciones geográficas, formas de financiación, intereses económicos de los actores ilegales y control territorial, entre otras condiciones. Estas diferencias a nivel regional han marcado el conflicto y han tenido efectos en el desarrollo nacional. Colombia tiene zonas donde existe mayor control estatal y provisión de bienes públicos, específicamente en el centro y algunos departamentos del norte. No obstante, en la periferia del país y las zonas fronterizas existe un amplio contraste: allí el conflicto armado se ha sentido con mayor intensidad y la influencia de grupos ilegales como los paramilitares y guerrillas ha sido constante.

La zona donde se ubica la Central Hidroeléctrica Amoyá ha sido un territorio largamente dominado por la guerrilla de las

FARC, especialmente por el Frente 21, como se mencionó en el recuento del surgimiento de esta guerrilla en el Tolima, el cual contaba con apoyo de cuadros políticos como el Partido Comunista Colombiano Clandestino, también conocido como el PC3, organización política paralela de las FARC creada en el año 2000.

2.1 Análisis del conflicto en el ámbito comunitario

Debido a su difícil acceso y extensión, la zona del Cañón de las Hermosas ha sido aprovechada por las FARC para ejercer dominio territorial y de su población. La presencia del Ejército Nacional antes de la realización del proyecto Amoyá era inexistente.

En Chaparral siguen existiendo dos contextos: uno, vinculado con el acontecer del casco urbano, donde se encuentra la Alcaldía, la iglesia, el Comité de Cafeteros, el comando de Policía y otras instituciones, y donde se concentra la mayoría de la población; y otro, en la zona rural del corregimiento de Las Hermosas, donde han dominado las FARC. Antes de las inversiones de ISAGEN la mayoría de los caminos estaban mal adecuados y no había presencia de la Fuerza Pública, por lo que pocas personas se aventuraban a ir a la zona sin permiso de los líderes de las juntas o sin avisar a los residentes de su eventual visita. El Cañón de Las Hermosas era conocido como el “resort de las FARC” ya que funcionaba como área de descanso temporal y retaguardia para la comandancia de esta guerrilla y algunas de sus tropas.

Para la población de Las Hermosas la presencia histórica de las FARC ha suplido la autoridad, lo que ha simbolizado un tipo de

Gobierno. En este territorio Las FARC han administrado justicia, dirimido asuntos de convivencia, establecido horarios de tránsito y de movimiento de personas, delimitado linderos y proporcionado seguridad, entre otras acciones. En una de las entrevistas realizadas para este documento, un líder de la zona indicó que durante aquella época no había crímenes, la gente dejaba las puertas abiertas y sin seguros. La presencia de las FARC en la zona era tan marcada, que hacía jornadas para gestionar conflictos en un área apartada de Las Hermosas, donde tenían instalado un tipo de juzgado, que se llegó a conocer como el “Juzgado 21” en alusión al Frente 21.

Dicho frente ha sido fundamentalmente político – militar. Estaba descrito al Comando Conjunto Central (CCC), liderado por Alfonso Cano, máximo líder de esta guerrilla quien fue abatido en 2011 por el Ejército Nacional. Cano era considerado uno de los principales ideólogos de la guerrilla y también uno de los pioneros en la conformación en 2000 del Partido Comunista Clandestino (PC3), que conformó células políticas rurales y urbanas destinadas a impartir la doctrina comunista y de apoyo a las FARC en distintas zonas del país.

En la década de 1990 Alfonso Cano asumió el liderazgo del CCC y posteriormente, del PC3. Durante esa década él y la comandancia de las FARC decidieron fortalecer de forma más decidida los frentes del CCC, mediante el aumento de la tropa y las acciones guerrilleras. Debido a dichas acciones, el Frente 21 se convirtió en uno de los principales frentes de las FARC, llegando a tener más de 3.000 hombres en armas en su mejor momento.

La mayor parte de los habitantes del Cañón de Las Hermosas se habían venido habituando a las FARC desde hace, aproximadamente, 50 años. Las comunidades conformaban una relación de sincretismo con este grupo armado; es decir, habían aprendido a conciliar los intereses de la insurgencia con sus propios intereses como comunidad. Era común que algunos integrantes de un grupo familiar de Las Hermosas hicieran parte activa o fueran simpatizantes del Frente 21. La población interactuaba de manera cotidiana con tropas de las FARC y conocían personalmente a los líderes, asistían a reuniones sobre desarrollo, entre otras. Las FARC estaban íntimamente involucradas en la vida diaria de las comunidades de manera pacífica y cuasi-paternal.

En la zona del Cañón existía un trato particular o “preferencial” que las guerrillas le daban a la población, el cual consistía en que no la acosaban ni cobraban vacunas (extorsiones), como sí sucedía en otras zonas del país con dominio guerrillero. Esto le permitía a la comunidad vivir en un clima de relativa paz y convivencia. La zona urbana del municipio de Chaparral tampoco vivía bajo el asedio de la guerrilla. Allí no se registraban tomas del municipio y tampoco ocurrencia de masacres.

Para su financiación y sostenimiento, desde mediados de la década de los 90 el Frente 21 tenía como principal fuente de recursos el cultivo de amapola, bien sea con sembradíos de su propiedad o mediante el cobro de vacunas a los narcotraficantes. La problemática que se generó asociada al cultivo y tráfico de amapola llamó la atención del Gobierno nacional, no sólo por ser fuente

de financiación para el frente, sino por estar ubicado en un parque nacional.

2.2 Surgimiento de liderazgos en medio del conflicto

En 2003 el Gobierno nacional lanzó una estrategia de desarrollo alternativo para beneficiar a familias que estaban en ecosistemas valiosos para Colombia y en donde existieran cultivos ilícitos. Con esta estrategia se creó el Programa Familias Guardabosques (PFGB) el cual incluyó en una primera fase 30 veredas del municipio de Chaparral y otros 12 municipios del país. El programa consistió en el abandono voluntario de la actividad de siembra de hoja de coca o amapola por parte de las familias y la sustitución paulatina del bosque, a cambio de un subsidio temporal por parte del Gobierno y el apoyo técnico para el desarrollo de proyectos productivos alternativos.

Desde La Violencia Partidista no llegaba un programa institucional al Cañón de las Hermosas. Al principio, fue bien acogido por las familias que se inscribieron, pues les generó un sustento fijo. Sin embargo, meses después de implementado, las FARC les prohibió recibir dichos ingresos pues representaba una amenaza para su dominio territorial. Para los beneficiarios del programa la prohibición ocasionó una seria afectación a sus ingresos.

Las comunidades empezaron a manifestar su descontento a los representantes en las JAC, quienes, a su vez, ponían en conocimiento a los líderes guerrilleros. Para esos efectos, las JAC crearon un “Comité de Gestión” que sería el organismo para dialogar con los comandantes de las FARC y representar los intereses de la comunidad. Esto causó

fricciones entre algunos líderes y algunos cuadros guerrilleros. Para los comandantes del Frente 21, las comunidades podían estar poniéndose del lado de la institucionalidad o servir para propósitos de inteligencia militar del Ejército. En palabras de un ex líder de la zona, debido al PFGB la guerrilla empezó a ver “fantasmas en todos lados”. Esta divergencia concreta entre los intereses de la comunidad y los de las FARC, representó un cambio sutil pero significativo en la relación entre la guerrilla y las comunidades.

Además, con la ampliación de la influencia del Frente 21 en el territorio se empezaron a presentar quejas de abusos contra la población por parte de algunos miembros de la guerrilla, que, sin mayores pruebas, acusaban a miembros de las comunidades de ser informantes o colaboradores del Ejército o de violar alguno de los reglamentos del Frente 21, y en consecuencia hacían juicios y ajusticiamientos. Las JAC dispusieron mecanismos internos para auto-gestionar los conflictos y activaron los Comités de Convivencia que dispone la ley colombiana para dirimir conflictos al interior de las comunidades. Paradójicamente, la comandancia del Frente 21 vio positivamente la activación de dichos comités, ya que se quitaban una carga y no se *“echarían a la comunidad encima”*, como indicó un líder comunitario.

En medio de esa situación, las comunidades, representados por los presidentes de las JAC, empezaron a asumir posiciones de liderazgo y a marcar posiciones frente al grupo armado. Los presidentes de junta adquirieron experiencia para negociar intereses comunes de la población que representaban y ante otros entes, entre ellos, la institucionalidad.

Las primeras manifestaciones de liderazgo comunitario facilitaron la conformación de la Asociación de Las Hermosas con desarrollo al futuro (Asohermosas), la cual aglutinó la representación de las 28 veredas del corregimiento. Asohermosas surgió como parte de una estrategia de la comunidad para aprovechar los posibles beneficios derivados de la construcción de la central hidroeléctrica, proyecto inicialmente gestionado por la empresa colombiana Generadora Unión.

3. Antecedentes del proyecto

En 1999 a la compañía de origen antioqueño Generadora Unión se le otorgó la licencia ambiental para construir una planta de generación eléctrica aprovechando el curso del Río Amoyá¹⁵. Debido a su diseño, este proyecto fue reconocido nacional e internacionalmente por aprovechar el caudal de las aguas sin necesidad de inundar zonas; es decir, sin un embalse. Por eso se le denomina técnicamente “a filo de agua”.

¹⁵ La Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), a través de la Resolución 0386 de marzo 18 de 1998 otorgó a Generadora Unión permiso para el estudio de los recursos naturales de la subcuenca del río Amoyá y Ambeima, con el propósito de proyectar trabajos para la realización de un proyecto hidroeléctrico. Más adelante, el 18 de junio de 1999, Generadora Unión presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Después del análisis del EIA, CORTOLIMA determinó que el proyecto era viable ambientalmente y le otorgó la Licencia Ambiental Única para la construcción y operación del proyecto de Generación Hidroeléctrica del río Amoyá a través de la Resolución 1858 del 16 de diciembre de 1999, la cual fue modificada en diferentes oportunidades (Información suministrada por ISAGEN).

Generadora Unión llegó al Corregimiento de Las Hermosas en 2001 con la intención de socializar y concertar los beneficios con la comunidad. En esos primeros acercamientos se encontraron ante la dificultad que implicaba la fuerte presencia de la guerrilla de las FARC y su influencia en las comunidades. En aquella etapa, la empresa empezó a crear expectativas en la comunidad que, luego, por cuestiones técnicas y financieras no se pudieron cumplir. Dichas expectativas le fueron heredadas a ISAGEN cuando asumió el proyecto, años más tarde. Entre las promesas hechas a la comunidad por Generadora Unión había inversiones sociales como la mejora de equipamientos hospitalarios, escuelas, vías de acceso y un teleférico.

Aparte, la empresa prometió a las comunidades que éstas podrían participar en la seguridad del proyecto con la creación de una cooperativa que evitaría la necesidad de traer el Ejército al territorio. – la llamaron “Guardavativos”. La noticia entusiasmó a las comunidades, no sólo porque generaría empleo temporal para los habitantes de las veredas, sino también porque los comandantes del Frente 21 aprobarían la ejecución del proyecto, ya que la mayor preocupación de la guerrilla era que el Estado empezara a ejercer presencia. Sin embargo, construir una hidroeléctrica sin la presencia del Ejército era poco probable, pues las centrales de generación son obras de interés social y por tanto el Estado debe garantizar la protección de los proyectos.

Cabe destacar que Generadora Unión contó con la ventaja de encontrar en el territorio una comunidad organizada en torno a las JAC, lo que facilitó el diálogo inicial. Los presidentes y representantes de las veredas

se reunían con empleados de la empresa en el casco urbano de Chaparral y luego los representantes de las veredas, por obligación, debían consultar con los comandantes guerrilleros, de tal forma que los presidentes de las juntas se convertían en interlocutores informales entre las partes. La comunidad quería los beneficios del proyecto, pero éste no se podía adelantar sin la aprobación de las FARC. Por ello los presidentes de las JAC empezaron un proceso de diálogo para convencer a la guerrilla de las bondades de la hidroeléctrica en materia social. Además, los representantes querían facilitar el diálogo entre las partes, ya que la empresa no podía interactuar con el grupo armado. Cuando el proceso llevaba unos meses y avanzaba positivamente en la definición de beneficios, Generadora Unión anunció que el proyecto sería asumido por otra empresa. En 2006 ISAGEN le compró el proyecto sobre planos y asumió el reto de construir la central hidroeléctrica¹⁶.

Hasta principios de 2016, ISAGEN fue una empresa de sociedad mixta, cuyo principal accionista era el Estado colombiano, con 57% de las acciones. Por decisión del Gobierno Nacional este porcentaje fue vendido a inversionistas privados.

A pesar de conocer que esta zona representaba alto riesgo en materia de seguridad y que las comunidades tendrían reparos para la construcción de la hidroeléctrica, los directivos de ISAGEN,

¹⁶ A través de la Resolución 531 de 1 de junio de 2006 CORTOLIMA aprueba a cesión de derechos y obligaciones ambientales del proyecto hidroeléctrico en los ríos Amoyá y Ambeima a ISAGEN S.A. E.S.P

decidieron comprar el proyecto. Fueron varias las razones.

En primer lugar, la voluntad de la alta gerencia para conformar este proyecto. El gerente general presentó la iniciativa ante la Junta Directiva, exponiendo su viabilidad financiera y su rentabilidad. Además sostuvo que la empresa tenía las capacidades para gestionar los riesgos del entorno que representaba el Cañón de Las Hermosas, como se explicará más adelante.

La segunda razón para adquirir el proyecto era su rentabilidad financiera. La obra no necesitaría la compra de extensas zonas para ser inundadas, no se requerían procesos de reasentamiento, y el retorno en la inversión era adecuado, en parte por la solidez del mercado a nivel nacional y una normativa favorable para los proyectos de generación eléctrica.

En tercer lugar, y quizás más importante, es que ISAGEN era una empresa mixta con gran porcentaje de participación del Estado, por lo cual podía asumir mayores riesgos de entorno como el que representaba el Cañón de Las Hermosas. El proyecto era una iniciativa pública que contaba con la aprobación y el interés del presidente Álvaro Uribe Vélez.

3.1 Valoración y exposición al riesgo

A finales de los años 90, ISAGEN empezó a ser blanco de amenazas por parte de las guerrillas en el país. Señalaban a la empresa y al sector eléctrico en Colombia de tener “una gran deuda” con la sociedad, a la par que dinamitaban torres eléctricas y secuestraban operarios de las empresas. Los directivos de ISAGEN se dieron a la tarea de entender el contexto y la complejidad de los territorios en

donde operaba la empresa para aquella época.

Con el desarrollo de encuentros con la sociedad civil y la elaboración de estudios de entorno, entendieron que los riesgos en materia de seguridad deberían ser valorados no sólo como riesgos comunes en seguridad industrial y seguridad física, sino como un aspecto social derivado de la presencia de la empresa en ciertos contextos. Para estos efectos, la empresa empezó a valorar sus riesgos en seguridad y también en DDHH teniendo en cuenta las expectativas y recomendaciones de las comunidades. En los modelos de gestión del riesgo, la empresa incluyó aquellos posibles riesgos causados por la operación hacia el entorno, no sólo frente a la construcción de infraestructura de generación eléctrica, sino también en decisiones operativas como elaboración de convenios con la Fuerza Pública, contratación de personal de seguridad, bienes y servicios locales, entre otros.

Esta actitud corporativa frente al riesgo le permitió a la empresa entender que antes de entrar a un territorio era necesario valorar de forma adecuada los riesgos que tendrían que administrar, incorporando los riesgos sociales, y elaborar, además, estrategias específicas para administrar los riesgos locales. De acuerdo con entrevistas corporativas realizadas para este informe, el proyecto de la Central Hidroeléctrica Amoyá, se presentó como piloto de esta visión frente al riesgo y se le vio como un factor de competitividad para el emprendimiento de otros proyectos.

Al ser en su mayoría pública, la empresa podía asumir mayor exposición al riesgo y experimentar más con enfoques innovadores en la gerencia de los riesgos de lo que quizá estaría dispuesta a asumir una empresa

privada. Gracias a la experiencia ganada en Amoyá, la empresa emprendió otros proyectos complejos como la construcción de la Hidroeléctrica Sogamoso en Santander, un entorno con no menos desafíos que el sur del Tolima, pues en el área de influencia de la Central Sogamoso confluyeron intereses políticos, ambientalistas y la presencia de diversos grupos armados con intereses contrarios¹⁷.

Algunos empleados de ISAGEN y la firma consultora contratada para realizar los primeros acercamientos con las comunidades reconocen que siempre estuvieron expuestos a un alto grado de incertidumbre y riesgos en materia de seguridad. Sin embargo, cabe destacar que tras los análisis adelantados por la unidad de análisis de riesgos, ISAGEN elaboró una estrategia robusta para el manejo de la seguridad física de contratistas y trabajadores. En primer orden se contempló el ingreso al territorio de la mano de la institucionalidad, asegurando primero mínimas condiciones en materia de seguridad. Se articularon, por otra parte, medidas operativas como el continuo monitoreo de posibles afectaciones de DDHH y Derecho Internacional Humanitario derivadas de la operación y se ofrecieron además capacitaciones permanentes en autocuidado y seguridad física.

3.2 Primeros acercamientos de ISAGEN

Alrededor del año 2006 ISAGEN empezó su trabajo de acercamiento con las

comunidades. La empresa se encontró con una comunidad muy organizada, especialmente en la representación de la misma que ejercía Asohermosas. El proceso organizativo encontrado, como se explicó, parte de algunos antecedentes en el programa de las Familias Guardabosques.

Ante las promesas hechas por Generadora Unión, ISAGEN aclaró que buena parte de éstas no podían ser implementadas por razones financieras. Así mismo, señaló que no era viable la construcción de la hidroeléctrica, un bien de interés general y social, sin la presencia de la Fuerza Pública. La comunidad entendió que buena parte del proyecto consistía en la construcción de túneles y obras subterráneas, para los cuales se requiere el uso de explosivos, que en Colombia sólo pueden ser custodiados por el Ejército Nacional. Por otra parte, no era lógico que el proyecto no contara con la presencia de la Fuerza Pública al ser ISAGEN una empresa del Estado. Por lo anterior, las negociaciones entre las comunidades y la empresa debieron empezar desde cero, aunque la sinceridad y claridad de la empresa frente a las expectativas de las comunidades y el acompañamiento del Ejército Nacional propiciaron un ambiente de confianza para las negociaciones.

Los procesos de negociación, consulta y concertación del proyecto con las comunidades empezaron a adelantarse en el casco urbano de Chaparral. Para facilitar el funcionamiento de Asohermosas, la empresa la apoyó con una oficina permanente, alquiler de salones para las reuniones amplias con los representantes de las JAC y cubría los gastos de transporte y alimentación. Antes de ser acordados por las partes, Asohermosas debía consultar con “los de arriba” los avances de

¹⁷ Ver más en ISAGEN. Hidroeléctrica Sogamoso. [En línea] [Consultado el 25 de octubre de 2016]. Disponible en: <https://www.ISAGEN.com.co/nuestra-empresa/generacion-de-energia/generacion-hidroelectrica/central-hidroelectrica-sogamoso/>

las negociaciones. Era una exigencia de los comandantes del Frente 21.

En 2006, en el marco de la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe, la Fuerza Pública fortaleció sus operaciones para capturar “objetivos de alto valor”; es decir, dar de baja o aprisionar a los principales cabecillas de las guerrillas. Las Fuerzas Militares, por tanto, lanzaron varias operaciones para neutralizar al máximo comandante de las FARC, Alfonso Cano, un proceso que terminó con su muerte tras la operación Odiseo, en 2011.

Aunque en los meses anteriores a la ofensiva militar en Chaparral se había avanzado en la negociación entre ISAGEN y las comunidades, la ofensiva militar dificultó el ambiente de negociación. Para la guerrilla era claro que la construcción de la hidroeléctrica traería al Ejército Nacional. Esta situación impidió avanzar en las negociaciones y adelantar los primeros trabajos de ingeniería.

Para superar el problema, ISAGEN contrató un consultor independiente con experiencia en territorios complejos, que ayudara a identificar e implementar una estrategia de relacionamiento con las comunidades.

La primera tarea de la consultoría fue la realización de un diagnóstico del territorio, además de un mapa de actores que le permitiera identificar aquellos actores críticos para el relacionamiento y claves para conformar una estrategia de aliados para el proyecto. Una de las recomendaciones de dicho diagnóstico fue involucrar al entonces gobernador del Tolima, elegido en 2006. El gobernador era oriundo de Chaparral y era una figura reconocida entre autoridades y comunidades del municipio. Este funcionario fue fundamental en la conformación de la

Mesa de Transparencia, la cual se explicará más adelante.

Los primeros contactos que realizó la consultoría se tuvieron que realizar en el casco urbano de Chaparral, ya que ISAGEN aún no “podía subir”, haciendo alusión a los riesgos de entrar al corregimiento Las Hermosas por la presencia de las FARC. En las primeras reuniones que sostuvieron el consultor y Asohermosas, se sentía un clima de desconfianza. Las reuniones podían durar horas sin que se avanzara en algún acuerdo. A pesar de las dificultades para llegar a resultados concretos, los participantes de dichos espacios resaltan que los representantes sociales siempre fueron muy respetuosos y abiertos al diálogo, en parte por la idiosincrasia de la zona. Estos ejercicios eran liderados por expertos en negociación, invitados por el consultor, y contaban con la presencia del director del proyecto de ISAGEN y otros funcionarios. Esto último es importante ya que las comunidades sentían que había un funcionario del primer orden de la empresa en las discusiones.

Las conversaciones entre la empresa, el consultor y las comunidades duraron alrededor de un año. El diálogo avanzaba muy lentamente, por lo que la empresa y el consultor asumieron que, si bien estaba dentro del cronograma para empezar los trabajos de ingeniería, dicha negociación, sería una carrera de largo aliento. En palabras del director de la empresa consultora *“nos preparamos para una maratón y no para una carrera corta”*. Esto indica que las conversaciones entre comunidad y empresa no tenían tiempos fijos, aun cuando estuvieran atados a los cronogramas de las obras de ingeniería. Es decir existía cierta flexibilidad para el diálogo.

Durante el curso de las negociaciones se desarrolló una regla entre los actores: independientemente de las diferencias seguirían dialogando hasta llegar a un acuerdo sin importar cuánto se tardara. A través de este enfoque se fue construyendo confianza entre las partes.

4. Retos y desafíos

4.1 Seguridad y conflicto armado

A mediados de 2007 ya se tenían adelantadas las conversaciones entre ISAGEN y las comunidades, representadas por Asohermosas, que estaba logrando una mediación efectiva con todas las partes para que se iniciaran las obras civiles. Para esta época también el Ejército Nacional fortalecía su accionar en el cañón de Las Hermosas. El mando de la ofensiva militar estaba en manos del General Gustavo Matamoros Camacho, comandante de la Quinta División, encargada de la defensa y seguridad en los departamentos de Cundinamarca, Huila y Tolima.

El proyecto encontró en la figura del general Matamoros un actor propicio, puesto que éste consideraba que en zonas donde las FARC tenían fuerte arraigo entre las comunidades y una presencia histórica, la respuesta por parte de la Fuerza Pública debería ser integral y no sólo militar. Por tanto, debía existir un proceso en que el Ejército ganara la confianza de la población a través de inversión social, brigadas de salud y construcción de infraestructura básica, entre otros.

Así, al tiempo que el Ejército ofrecía una respuesta militar y establecía las primeras bases militares, también empezó a adelantar programas sociales. Sin embargo, ello no

significó el inicio del proyecto. La posición de la comandancia del Ejército implicaba adelantar un proceso de consolidación de la Fuerza Pública antes de arrancar las obras civiles. Ese programa se extendió por alrededor de un año.

Para los comandantes del Frente 21 el accionar del Ejército representó una amenaza a su control territorial. Aunque los comandantes revisaban eventualmente los acuerdos entre comunidad y empresa, le quitaron su apoyo inicial al proyecto como respuesta al incremento de las acciones militares. Para las guerrillas el proyecto era una trampa para que el Ejército se consolidara en el territorio. En este punto las comunidades empezaron a tener fricciones con los comandantes guerrilleros, pues éstos acusaban a algunos líderes de ser “sapos” o “vendidos” por su insistencia en la construcción de la central hidroeléctrica.

De igual modo, algunos miembros de las comunidades tuvieron fricciones con Asohermosas, pues le criticaban su liderazgo frente al proceso de negociación y su insistencia con la construcción de la central hidroeléctrica. En este punto del proyecto, el entorno estaba muy convulsionado por cuenta de la ofensiva del Ejército y la negativa de las guerrillas al inicio de la construcción. Las comunidades estaban viviendo una situación inusitada, puesto que a pesar de que las FARC hacían presencia histórica en el territorio, hasta entonces no se presentaban enfrentamientos con el Ejército. Ahora, los combates y la ofensiva aérea eran algo nuevo en el Cañón de Las Hermosas.

4.2 Plan de beneficios a la comunidad

Si bien el proyecto ya contaba con la Licencia Ambiental aprobada, ISAGEN decidió, como

estrategia, acordar con las comunidades y las autoridades regionales ambientales un plan de compensaciones en materia de impactos y de inversión complementaria. Este plan quedó plasmado en un Acta de Aceptación que se editó en el documento “Concertación de beneficios con la comunidad del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico del Río Amoyá”. Fue ampliamente difundido entre las comunidades, quienes luego lo denominaron “el testamento”. El documento contuvo la totalidad de los acuerdos entre comunidad y empresa relacionados con los beneficios sociales y ambientales, algunos enmarcados en el Plan de Manejo Ambiental y otros por Gestión Complementaria de la Compañía. El documento fue importante porque era el acuerdo de compromisos pactado entre la empresa y la comunidad, con las instituciones como garantes, para que aquélla le diera el aval al proyecto.

El Acta de Aceptación se firmó en la Alcaldía de Chaparral el 18 de diciembre de 2007, por parte de Asohermosas, el Gobernador del Tolima, el Alcalde Municipal de Chaparral, el Personero del municipio y el Gerente General de ISAGEN. El documento incluyó asuntos como el funcionamiento de la Mesa de Transparencia, la creación del Observatorio de Derechos Humanos, la creación de una Veeduría Ciudadana, así como programas de recuperación de microcuencas, inventario y conservación de recursos hídricos, reforestación y mantenimiento de zonas boscosas, planes dirigidos a atender una de las mayores preocupaciones ambientales, relacionada con el acceso al agua, manejo de predios, manejo de la contratación de mano de obra, obras de infraestructura social, programas de salud, educación ambiental, entre otros programas y actividades.

Frente a la contratación local, se acordó que el contratista supliera sus necesidades de mano de obra calificada y no calificada, dando prioridad al personal de las veredas del corregimiento y en caso de no encontrarse los perfiles requeridos, se buscara en otras áreas de Chaparral. Para ello se estableció que Asohermosas hiciera la recepción de hojas de vida, con lo que esta organización se vio fortalecida dada su gestión de las solicitudes de empleo. ISAGEN le facilitó una oficina en el casco urbano y recursos para la vinculación de personal para llevar a cabo su función. Fruto de este acuerdo la Asociación pasó de poco menos de 100 afiliados a casi 1.300.

En el Acta de Aceptación la empresa también acordó el fortalecimiento de otras áreas como educación, cultura, salud, reparación de vías y accesos por cuenta de las obras, además de otros beneficios para las veredas y el municipio de Chaparral.

4.3 La Mesa de Transparencia y el Observatorio de Derechos Humanos

Antes de firmarse los acuerdos con las comunidades, los líderes de Asohermosas tenían la seria preocupación de perder la relativa tranquilidad que por años había reinado en el corregimiento de Las Hermosas. También temían quedar en medio del conflicto entre el Ejército y la guerrilla. A pesar de que buena parte de los compromisos entre empresa y comunidad ya se habían acordado, en materia ambiental, social y de contratación local, la comunidad temía perder su seguridad. Esto impedía la formalización de los acuerdos entre la empresa y la comunidad y también impedía cualquier tipo de trabajo civil en la zona.

Ese temor de la comunidad motivó a ISAGEN a buscar alternativas para que las comunidades tuvieran un mecanismo de vigilancia para los Derechos Humanos y crear espacios donde se pudieran ventilar sus quejas y denunciar hechos relacionados con eventuales violaciones a los DDHH en sus veredas.

El general Matamoros conocía de la realización de mesas de conciliación en el departamento de Arauca con campesinos y sociedad civil en contextos marcados por el desacuerdo y la confrontación, y le propuso a ISAGEN la posibilidad de replicar este espacio en Chaparral. La empresa tomó la decisión de facilitar la conformación de este espacio al que se le llamó la “Mesa de Transparencia” junto con un mecanismo complementario, propuesto por la comunidad, denominado Observatorio de Derechos Humanos. En la creación de la Mesa fue fundamental la figura del gobernador del departamento como mediador entre las partes, al tiempo que gestionó la participación de la Vicepresidencia de la República para los Derechos Humanos y del delegado de la Organización de Naciones Unidas.

La Mesa se desarrolló en un espacio físico facilitado por ISAGEN en el casco urbano de Chaparral, donde se hacían presentes representantes de las comunidades y de la sociedad civil del corregimiento de Las Hermosas, junto con organismos del Estado, como Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía, Personería municipal, Vicepresidencia de la República, Gobernación del Tolima (por medio de su Secretaria de Gobierno y asesor de paz, figura creada para este propósito), Alcaldía de Chaparral, Ejército Nacional y Policía Nacional, y la ONG Reiniciar. Adicionalmente se contó con el monitoreo de

las Naciones Unidas. La logística y la convocatoria estaban en manos de ISAGEN y la Gobernación del Tolima¹⁸. En la Mesa también participaron los corregimientos vecinos del Limón y La Marina. Aunque éstos no eran territorios de influencia directa del proyecto, durante el desarrollo de la Mesa las mayores quejas de vulneración de derechos provinieron allí. Se les dio el mismo trámite.

El Observatorio de Derechos Humanos fue creado por la comunidad como mecanismo para identificar, previo a la realización de la Mesa de Transparencia, eventos o alternaciones a la convivencia o a los Derechos Humanos. Era un espacio convocado por los campesinos y la Personería Municipal, en el que se recibían y discutían quejas por supuestos abusos de la Fuerza Pública. Allí se analizaban y luego se llevaban a la Mesa de Transparencia. De esta manera se evitaba que las personas directamente implicadas presentaran los casos en la Mesa. Paralelo a este proceso, las comunidades recibían capacitación en temáticas relacionadas con DDHH.

El papel de ISAGEN en la Mesa de Transparencia se limitó a temas de organización logística. La empresa no hizo parte activa de la Mesa, aunque se pudieran ventilar quejas derivadas de la ejecución del proyecto, su papel fue de observador y facilitador.

¹⁸ Para conocer más acerca de la metodología y detalles de la conformación de la Mesa de Transparencia consultar el documento de la FIP: Mesa de Transparencia y Observatorio en Derechos Humanos – Proyecto Hidroeléctrico de Amoyá – ISAGEN. [En línea] (2014). [Consultado el 24 de noviembre de 2016] Disponible en: <http://www.ideaspaz.org/tools/download/59644>

Para el general Matamoros no fue fácil convencer a los miembros de la Fuerza Pública de sentarse en la Mesa de Transparencia, en donde eventualmente pudieran ser fiscalizados por sus actuaciones en el territorio, más aún cuando se tenía el estigma y la percepción de que los campesinos de Las Hermosas eran colaboradores o hacían parte de la guerrilla.

La Mesa de Transparencia y el Observatorio fueron mecanismos útiles para enfrentar situaciones críticas en las relaciones entre la población y la Fuerza Pública. Campesinos del sur del Tolima denunciaron entre 2007 y 2008 la ocurrencia de “falsos positivos”, como se le llamó a una práctica adjudicada al Ejército que consistía en asesinar campesinos inocentes y hacerlos pasar como miembros de la guerrilla, en este caso del Frente 21. Los campesinos denunciaron otros excesos de la Fuerza Pública, como la entrada violenta a los predios en busca de guerrilleros y la captura de líderes sindicados de pertenecer o apoyar al Frente 21.

El hecho más significativo fue la captura del presidente de Asohermosas, junto con otras diez personas en Chaparral e Ibagué por ser supuestos miembros del Frente 21 y del PC3. Este hecho motivó manifestaciones de rechazo por parte de las comunidades y autoridades locales. Una de ellas fue una marcha convocada en agosto de 2009 en la que participaron aproximadamente 600 pobladores de los corregimientos de San José de las Hermosas, La Marina, San Antonio y El Limón (de Chaparral). La manifestación incluyó el bloqueo de vías de acceso al casco urbano y a la zona de obras de la hidroeléctrica. La intención era llamar la atención de los medios de comunicación e instituciones por la situación que soportaban

las comunidades frente a las operaciones militares.

Miembros de las comunidades participantes en las manifestaciones recuerdan el clima de alta tensión que se sentía durante esos meses. Mencionan que las comunidades de Las Hermosas y de los corregimientos aledaños vivían en medio de la estigmatización. Por un lado algunos miembros de las guerrillas acusaban a los líderes de estar al servicio del Estado y la Fuerza Pública y la comunidad del centro urbano de Chaparral observaba con sospecha a los campesinos por su supuesta colaboración con el Frente 21. Durante las protestas de 2009 se incluyó una movilización pacífica con velas y banderas blancas hacia el casco urbano de Chaparral. Según cuentan algunos participantes de esta marcha. Se escuchaban tiros al aire y cerraron todos los establecimientos comerciales ya que algunos pobladores temían que llegaran al pueblo “los de arriba” -haciendo alusión a las FARC.

Este hecho motivó aún más el diálogo y la exposición pública de quejas por parte de las comunidades en la Mesa de Transparencia, una instancia valiosa como catarsis para las comunidades, una válvula de escape que permitió distender las tensiones en medio del conflicto. También se conformó como un espacio para discutir problemas concretos, hacer denuncias y buscar justicia y remediación frente a posibles violaciones de DDHH.

La Mesa se fortaleció como espacio de resolución constructiva de conflictos y de rendición de cuentas de la Fuerza Pública ante la ciudadanía. A ello también contribuyeron las instituciones públicas presentes en la Mesa, además del interés por parte del general Matamoros y otros altos

mandos de la Quinta División del Ejército, comprometida con tramitar y dar respuesta a los posibles afectados de las denuncias por presuntas alteraciones a los DDHH

4.4 Gestión social y relacionamiento

Durante todo el proceso de diálogo e implementación del PMA y de los acuerdos, el equipo humano y profesional de ISAGEN trabajaba de forma transversal. El lineamiento era que, cada quién desde su propio rol, desde los gerentes del proyecto hasta los ingenieros civiles y ambientales, aportara en la generación de confianza entre las comunidades. Esto permitía gestionar los desafíos del territorio desde todas las áreas de la organización involucradas, así como reducir los costos y las barreras de información crítica sobre el entorno que pudiera ser determinante para el éxito del proyecto. Así por ejemplo, en las reuniones con las comunidades se hacían presentes representantes de las áreas sociales y ambientales y empleados de las áreas de ingeniería, que luego compartían información entre sí.

Aunque todos los involucrados en la construcción de la central tenían la convicción de mantener un relacionamiento fluido y cercano con las comunidades de influencia, entre los años 2009 y 2010 la situación de seguridad impidió que el equipo de profesionales de la empresa pudiera ingresar a la totalidad de las veredas, bien fuera por los combates o porque la guerrilla impedía el tránsito de personas. Ello dificultó las labores de relacionamiento más cercanas y constantes de ISAGEN con la comunidad del corregimiento de Las Hermosas. Debían entonces realizar reuniones en la parte baja del corregimiento, en el casco urbano de Chaparral o vía telefónica, para no afectar la

comunicación, la participación y la planificación permanente con las organizaciones y representantes comunitarios.

Por otro lado, cabe destacar que la gestión social fue importante en la medida en que medió entre la visión operativa en materia de seguridad del equipo logístico (encargado de seguridad) y los trabajadores, pues varios de éstos decían que la mejor manera de entrar a los territorios era a través de la militarización de la zona o bajo esquemas de seguridad robustos. El equipo social por su parte indicaba que era necesario mantener excelentes relaciones con la comunidad y atender sus advertencias cuando decían si se podían “subir” o no.

Para ganar la confianza de las comunidades, el equipo de profesionales de ISAGEN mantuvo siempre un lenguaje transparente y les hizo saber que su presencia no significaba labores de información de inteligencia para el Ejército. Para ello el equipo social también se desmarcó desde el principio de mantener relacionamiento con la Fuerza Pública.

4.5 Construcción

El tiempo total de construcción del proyecto se extendió por cinco años, aunque se había previsto hacerlo en sólo tres, debido a que el contratista obtuvo rendimientos inferiores a los que se había comprometido.

Aunque finalmente las FARC habían dado apoyo inicial al proyecto, con todas las reservas que pudiera tener este grupo, la fase de construcción no estuvo exenta de problemas de seguridad, especialmente frente a los contratistas. En 2010 fue asesinado un trabajador de un contratista y

en el año 2011 otro, presumiblemente por guerrilleros del Frente 21.

Aunque en la zona donde se construyó la casa de máquinas había mayor presencia del Ejército gracias a la cercanía con un batallón, en la parte alta del Cañón, donde se adelantaba la construcción de instalaciones para la captación de aguas, la seguridad era más compleja. Aparte de asesinatos de contratistas se presentaron hechos de hostigamiento e instalación de artefactos explosivos en áreas donde transitaban las cuadrillas de contratistas y las caravanas de transporte de operarios de ISAGEN. Algunas entrevistas señalaron que esto podía deberse a la negativa de pagos de extorsión por parte de los contratistas.

Cabe también señalar que las guerrillas finalmente aceptaron la realización del proyecto, pues las inversiones sociales y los acuerdos entre empresa y comunidad fueron bien vistos por las comunidades. Además, el diálogo entre comunidades y Fuerza Pública en la Mesa de Transparencia estaba resultando exitoso. La guerrilla, ante este escenario, no pretendía enemistarse con las comunidades, así que aceptaron de forma cautelosa la realización del proyecto. Según una entrevista, un miembro guerrillero manifestó: *"Que construyan la hidroeléctrica, pero si 'suben más al Cañón' (Ejército o empresa) allá los vamos a estar esperando"*.

La Central Hidroeléctrica del Río Amoyá – La Esperanza, fue inaugurada en julio de 2013, en un acto que contó con la presencia de autoridades nacionales, regionales y comunidad. Esta obra civil generó más de 1.100 empleos directos durante la construcción, de los cuales 60% fue de las veredas de Las Hermosas y de la región. Otro beneficio de la hidroeléctrica, por normativa

colombiana, es el pago de transferencias de ley al municipio de Chaparral y a la Corporación Autónoma Regional – Cortolima durante la operación de la central. Dichos recursos tienen prioridad en obras de saneamiento básico y ambiental.

5. Situación actual

Social y ambiental

La Central Hidroeléctrica Amoyá – La Esperanza, generó un cambio significativo para las comunidades del corregimiento de Las Hermosas, en materia de inversión social, especialmente en salud, educación y saneamiento básico¹⁹. No obstante, existe la queja de restricciones de acceso al agua, pues miembros de las comunidades argumentan que desde que se construyó la central el caudal de algunos nacimientos y fuentes de agua ha disminuido, afectando la oferta del líquido para algunas veredas. Las autoridades ambientales y la empresa no tienen certeza de la causa, aunque se aduce la posibilidad de cambio en los ciclos del agua o factores ambientales ajenos a la operación de la Central, aunque no se descarta alguna afectación derivada de la construcción de la misma.

Por otro lado, gracias a la organización de la comunidad y los espacios para la concertación de los beneficios del proyecto con Asohermosas, los habitantes de Las

¹⁹ Para consultar el balance en materia de gestión social, ambiental y comunitaria, se puede revisar el documento de ISAGEN "Balance de la Gestión Social y Ambiental – Proyecto Hidroeléctrico del Río Amoyá" [En línea]. [Consultado el 7 de octubre de 2016] Disponible en: https://www.ISAGEN.com.co/comunicados/Amoya_balanceGSA_nov29_final.pdf

Hermosas lograron tomar conciencia de las oportunidades de su territorio y cómo pueden desarrollar un proyecto de vida en el mismo. La comunidad plasmó buena parte de esta visión en el documento "Plan de Desarrollo Sustentable Corregimiento de Las Hermosas (2015-2030)", financiado por ISAGEN y elaborado por las comunidades con el apoyo y orientación de la Universidad Javeriana. Para los líderes, dicho plan de desarrollo es una herramienta importante que les dejó el proyecto Amoyá y constituye también una herramienta de planeación para el corregimiento.

Organización comunitaria

Para los líderes de Asohermosas fue una conquista haber logrado la construcción de la central en medio de tantos conflictos. La conformación de la Mesa de Transparencia es parte de esta conquista, pues varios líderes no imaginaron tener un espacio en donde se pudieran sentar miembros de la Fuerza Pública y los campesinos de Las Hermosas. El proceso de fortalecimiento de Asohermosas dejó como resultado una comunidad empoderada, más consciente de su capacidad de liderazgo y poder de negociación.

La Mesa de Transparencia se mantiene, aunque ya no se reúne de forma tan recurrente como se hacía durante la etapa de construcción del proyecto. Allí se siguen discutiendo temas relacionados con los DDHH, pero ha cambiado la agenda de discusiones, ahora tiene orientación hacia el diálogo en temas para el desarrollo del territorio y mejora de indicadores sociales, como salud, educación y proyectos productivos, entre otros.

Seguridad y convivencia

El municipio de Chaparral vive en un periodo de calma, especialmente por el éxito militar del Ejército colombiano, ya que la ofensiva logró neutralizar a sus máximos jefes, Alfonso Cano y a alias "Marlon", además de reducir el número de combatientes de la guerrilla en todo el sur del Tolima. El territorio también se encuentra en relativa calma debido al desarrollo de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC en La Habana (Cuba), situación que ha disminuido ostensiblemente la intensidad del conflicto armado en esta zona de Colombia.

Actualmente en Chaparral hay dos bases militares que realizan periódicamente retenes en las vías de acceso a Las Hermosas y hacen requisas a quienes suben o bajan del corregimiento. Esto ha molestado en cierta forma a las comunidades, pues hasta hace algunos años no se realizaban este tipo de acciones.

Los problemas de seguridad en Chaparral y en el Corregimiento de Las Hermosas se dan por alteraciones comunes a la convivencia y por microtráfico, hurtos y riñas entre sus habitantes. Estas problemáticas de seguridad serán los retos que deberá enfrentar de forma más intensa la Fuerza Pública en Chaparral, si en el territorio la guerrilla de las FARC se desmoviliza como parte de las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla y el territorio se incorpora a una etapa de posconflicto.



PRACTICAL LEARNING
for INTERNATIONAL ACTION

CDA Collaborative Learning Projects
One Alewife Center, Suite 400
Cambridge, MA 02140 USA
www.cdacollaborative.org
feedback@cdacollaborative.org



Fundación Ideas para la Paz (FIP)
World Trade Center
Calle 100 #8A – 37
Torre A, Oficinas 305 y 701
Bogotá, Colombia
www.ideaspaz.org
fip@ideaspaz.org